contencioso-administrativo número 3/202/95, en el que son partes, de una, como demandante, don Santos Azofra Durán, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 21 de noviembre de 1994, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.—Desestimar el recurso número 202/95 interpuesto por la Procuradora señora Benítez Rodríguez, en la representación que ostenta contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 21 de noviembre de 1994, que se confirma por ser conforme a Derecho.

Segundo.—No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 5 de marzo de 1997.—P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres.: Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

5772 *ORDEN de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 3/400/1994, promovido por don Francisco Arbás Mon.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia con fecha 11 de noviembre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/400/1994, en el que son partes, de una, como demandante don Francisco Arbás Mon, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 10 de noviembre de 1993, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 3/400/1994, interpuesto por don Francisco Arbás Mon, contra las resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas descritas en el primer fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.—No hacemos una expresa condena de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 5 de marzo de 1997.—P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

5773 *ORDEN de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 3/312/1995, promovido por don Julio Romera Huerta.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 4 de diciembre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/312/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Julio Romera Huerta, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 13 de enero de 1995, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.—Desestimar el recurso número 312/95, interpuesto por don Julio Romera Huerta, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 13 de enero de 1995, que se confirma por ser conforme a Derecho.

Segundo.—No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 5 de marzo de 1997.—P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

5774 *ORDEN de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 3/597/1995, promovido por don Juan Serna Fuentes.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 20 de diciembre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/597/1995, en el que son partes, de una, como demandante don Juan Serna Fuentes, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 14 de febrero de 1995, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.—Se desestima el presente recurso contencioso-administrativo 3/597/1995, interpuesto por don Juan Serna Fuentes, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 14 de febrero de 1995, y se confirma la citada resolución administrativa denegatoria de la compatibilidad solicitada para el ejercicio y desempeño de la profesión farmacéutica en oficina abierta al público, por ser conforme a Derecho.

Segundo.—No se hace expresa declaración en condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín

Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 5 de marzo de 1997.—P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

BANCO DE ESPAÑA

5775

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios que este Banco de España aplicará a las operaciones que realice por propia cuenta durante los días del 17 al 23 de marzo de 1997, salvo aviso en contrario.

	Comprador — Pesetas	Vendedor — Pesetas
<i>Billetes correspondientes a las divisas objeto de cotización por el Banco de España:</i>		
1 dólar USA:		
Billete grande (1)	140,54	146,34
Billete pequeño (2)	139,09	146,34
1 marco alemán	82,37	85,77
1 franco francés	24,41	25,41
1 libra esterlina	224,42	233,67
100 liras italianas	8,26	8,60
100 francos belgas y luxemburgueses	399,32	415,79
1 florín holandés	73,21	76,23
1 corona danesa	21,58	22,47
1 libra irlandesa	219,12	228,15
100 escudos portugueses	81,94	85,32
100 dracmas griegas	52,35	54,51
1 dólar canadiense	102,92	107,16
1 franco suizo	95,71	99,66
100 yenes japoneses	113,55	118,23
1 corona sueca	18,00	18,74
1 corona noruega	20,43	21,27
1 marco finlandés	27,58	28,72
1 chelín austríaco	11,70	12,19
<i>Otros billetes:</i>		
1 dirham	13,78	15,46

(1) Esta cotización es aplicable a los billetes de 10, 20, 50 y 100 dólares USA.

(2) Aplicable a los billetes de 1, 2 y 5 dólares USA.

Madrid, 14 de marzo de 1997.—El Director general, Luis María Linde de Castro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5776

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 1997, de la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se inscribe a la entidad «Ingeniería y Técnicas de Calidad, Sociedad Limitada», en el Registro de Entidades de Inspección y Control Reglamentario.

Con fecha 2 de enero de 1996, se presentó en la Delegación Territorial de Vizcaya del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca por don Manuel Rapado de la Iglesia, en nombre y representación de «Ingeniería

y Técnicas de Calidad, Sociedad Limitada», con domicilio social en Lejona, calle Doctor Luis Bilbao Libano, número 42, entreplanta-departamento 7, del Territorio Histórico de Vizcaya, solicitud para su inscripción en el Registro de Entidades de Inspección y Control Reglamentario de acuerdo con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, por el que se regulan las entidades de Inspección y Control Reglamentario en materia de los productos, equipos e instalaciones industriales, para los siguientes campos:

Aparatos a presión.
Aparatos elevadores.
Seguridad en máquinas.
Almacenamiento de productos químicos.
Instalaciones de agua.
Vehículos y contenedores.
Combustibles gaseosos.
Combustibles líquidos.
Energía eléctrica.

La sociedad «Ingeniería y Técnicas de Calidad, Sociedad Limitada» (INTECA), ha presentado la documentación exigible por el artículo 9 del Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, acreditándose el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones establecidos en el mismo para su inscripción en los campos solicitados.

La Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas es el órgano competente para dictar la presente Resolución, en virtud de lo establecido en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, por el que se aprueba la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca.

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación, resuelvo:

Primero.—Inscribir a la entidad «Ingeniería y Técnicas de Calidad, Sociedad Limitada», con domicilio social en Lejona, calle Doctor Luis Bilbao Libano, número 42, entreplanta-departamento 7, del Territorio Histórico de Vizcaya, en el Registro de Entidades de Inspección y Control Reglamentario para los siguientes campos reglamentarios:

Aparatos a presión.
Aparatos elevadores.
Seguridad en máquinas.
Almacenamiento de productos químicos.
Vehículos y contenedores.
Combustibles gaseosos.
Combustibles líquidos.
Energía eléctrica.

Segundo.—La entidad deberá presentar antes del inicio de su actividad, ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en las que pretenda actuar la documentación que se establece en el punto 2, del artículo 13, del Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre.

Tercero.—Cualquier variación de los datos fundamentales que sirvieron de base para la inscripción de esta entidad, deberán ser comunicados, inmediatamente a esta Dirección.

Cuarto.—La entidad deberá mantener las condiciones de idoneidad que se han tenido en cuenta para su inscripción.

Quinto.—En todo momento, la entidad deberá aplicar en sus actuaciones en el territorio de esta Comunidad Autónoma, las tarifas definidas en la Orden de 30 de diciembre de 1993, con las consiguientes actualizaciones vigentes.

Sexto.—Cualquier modificación de las tarifas de inspección propuestas, conforme a los artículos 9 y 13, deberá ser comunicada previamente por la entidad a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma donde ejerza su actividad.

Séptimo.—En cualquier caso, la presente inscripción queda supeditada al mantenimiento de las condiciones de inscripción y en particular las que se refieren a las condiciones de incompatibilidad señaladas en los artículos 8.1.b) y 9.1.c) del Real Decreto 1407/1987.

Octavo.—Con anterioridad al inicio de su actividad, la entidad deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los puntos e) a i) del artículo 9.1, que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados d) a g) del artículo 8.2, del referido Real Decreto, relativos al personal mínimo y medios técnicos necesarios.